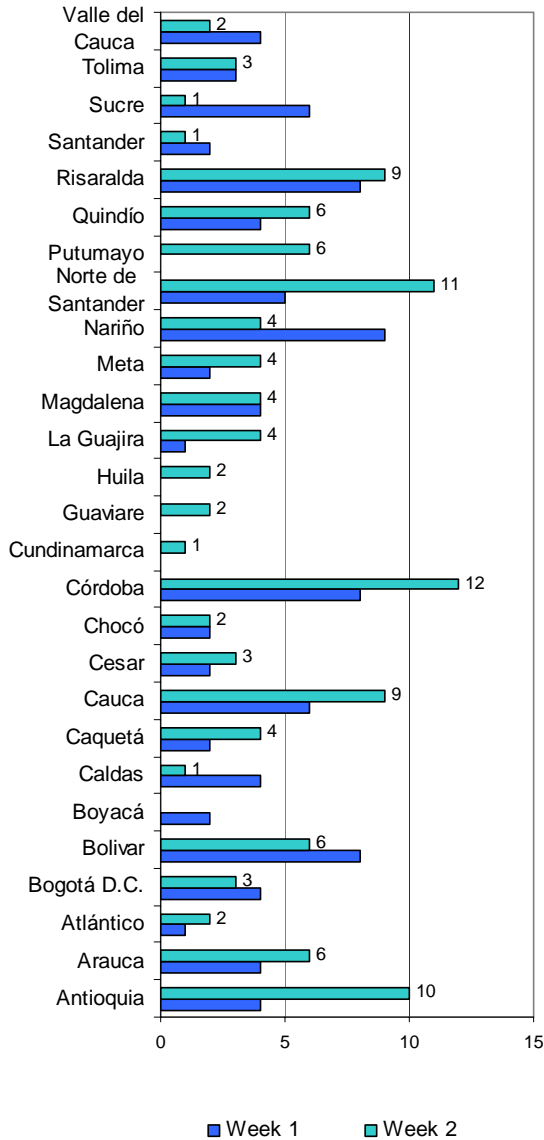


## Eventos por departamento



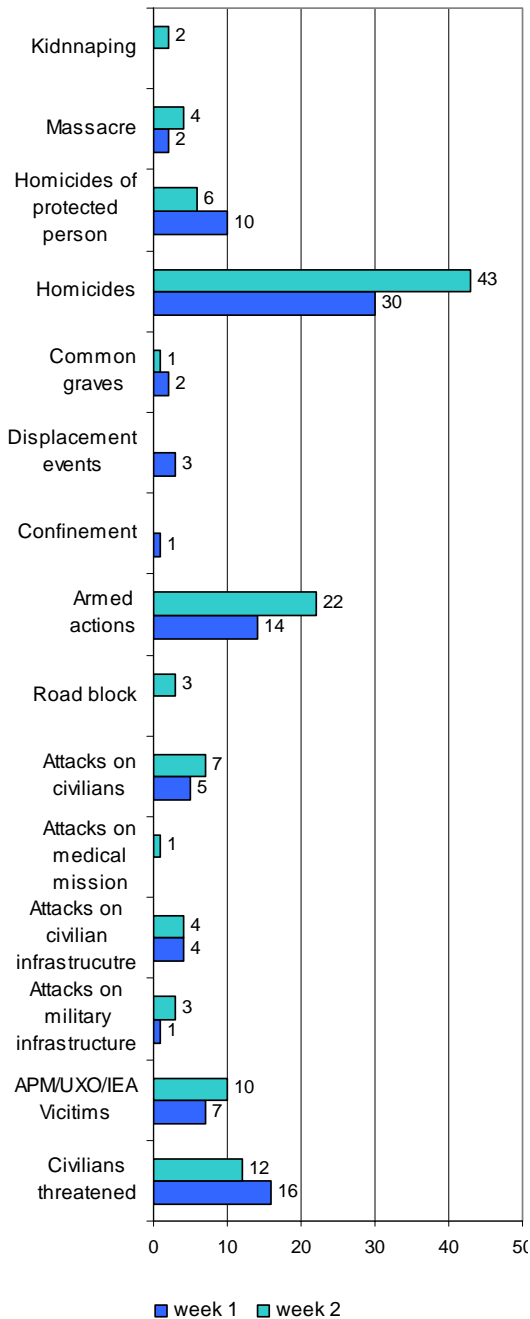
## Inseguridad alimentaria en Cauca, Nariño y Antioquia

### Las fumigaciones aéreas de cultivos de coca estarían causando escasez de alimentos en Cauca, Nariño y Antioquia

El 12 de mayo, Diakonie Katastrophenhilfe reportó que las fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos en la zona rural del municipio de Timbiquí, estarían causando la contaminación de fuentes de agua y la pérdida de cultivos de pancoger al interior de los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas y las reservas indígenas (1,813 km<sup>2</sup>). En consecuencia, las autoridades advierten que en el corto plazo puede presentarse una situación inminente de inseguridad alimentaria. Según un reporte de Diakonie, hay más de 1,400 afectados, en especial miembros de las comunidades indígenas quienes ya se habían desplazado en septiembre de 2008. También, el hospital local y las autoridades indígenas reportaron 54 casos (de los cuales 13 son niños) de intoxicación y quemaduras de piel debido a las fumigaciones.

En Nariño, las autoridades del municipio de Cumbitara denunciaron la destrucción de cultivos de planta de cacao en ocho pueblos a lo largo del río Patía y el incremento en los casos de enfermedades dermatológicas entre la población civil de los pueblos de Santa Rosa, Damasco y Sidón, como consecuencia del uso de glifosato. En ambos casos, las comunidades denunciaron que los cultivos destruidos por las fumigaciones hacían parte de proyectos de seguridad alimentaria que beneficiaban a los más vulnerables. En Antioquia, alrededor de 300 familias (1,500 personas) del municipio de San Francisco están en riesgo de desplazamiento debido a las permanentes operaciones de erradicación manual de los cultivos de coca. Los lugareños han indicado que los procesos de erradicación también están afectando sus propios cultivos y han amenazado la seguridad alimentaria de las comunidades. Otros casos de afectación a cultivos lícitos por fumigaciones aéreas fueron reportados en la zona rural de Tumaco (Nariño) y la región del Catatumbo (Norte de Santander) en donde las comunidades se han comenzado a desplazar.

Events per type



## Desplazamiento masivo en el departamento de Bolívar

Habitantes de San Pablo se encuentran en alto riesgo a causa de los combates entre el Ejército y grupos armados ilegales que se libran en la zona rural

Habitantes de la zona rural del municipio de San Pablo (Bolívar) se encuentran confinados desde principios de mayo debido a la intensidad de los combates entre el Ejército y supuestos frentes de las FARC y ELN. Información recopilada por la sub-oficina de OCHA Bucaramanga destaca que el 8 de mayo, 32 familias (100 personas) fueron obligadas a desplazarse al casco urbano del municipio de San Pablo. Del total de desplazados, 37 son niños y 19 son mujeres. Una semana después, el 15 de mayo, una misión de verificación de la Defensoría, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, autoridades locales del municipio y del Magdalena Medio visitó la zona. Según el reporte de misión, algunas viviendas resultaron averiadas y fueron ocupadas por los actores armados. El CICR brindó kits de hábitat y Acción Social repartió víveres. El 20 de mayo, luego de que se llegara a un acuerdo entre las autoridades locales y los municipios, la población desplazada inició el retorno a sus territorios con el acompañamiento de la Defensoría, Acción Social y las autoridades del departamento de Bolívar quienes establecieron un mecanismo de seguimiento al proceso de retorno.

## Asistencia de salud suspendida en El Tarra (departamento de Norte de Santander)

Luego del ataque a una misión médica, el personal médico suspendió actividades en el municipio

El 18 de mayo, el Instituto Departamental de Salud reportó que una ambulancia del municipio de El Tarra fue atacada por supuestos miembros de las FARC, quienes asesinaron a un herido que estaba siendo trasladado hacia Cúcuta. En el ataque, los médicos fueron amenazados y detenidos por los actores armados ilegales por un periodo de cinco horas. El 19 de mayo, el Instituto Departamental de Salud expidió un comunicado anunciando el cese de actividades en el Municipio y solicitando el traslado del personal. Alrededor de 8,000 personas dependen de la

asistencia proporcionada por el centro de salud, el cual permanece actualmente cerrado. Desde el 22 de mayo, una comisión del hospital municipal de Ocaña está brindando asistencia médica de emergencia; no obstante, es insuficiente para cubrir las necesidades de la población. Información recopilada por OCHA destaca que los trabajadores de la salud han sido frecuentemente amenazados por actores armados ilegales que hacen presencia en la región.

## **Protección de civiles**

### **La escalada de la violencia en varias regiones obliga a tomar medidas más enérgicas en cuanto a prevención y protección**

Los actos de violencia en escalada contra la población civil se han observado en el país desde principios de 2009. En Tumaco, Nariño, la propagación de la violencia generalizada debido a la presencia de grupos armados en disputa por el control del narcotráfico ha cobrado la vida de 110 civiles en lo que va corrido del año (300 en 2008) y ha causado varios desplazamientos. Con una población de 170,000-- en su mayoría afrodescendientes e indígenas en condiciones de extrema pobreza--, y una débil presencia estatal, la tasa de homicidios es ahora una de las más altas de Colombia-- 4 homicidios diarios en promedio--. Civiles, jueces y profesores se están convirtiendo en víctimas de amenazas y ataques. El 25 de abril la secretaria de educación fue víctima de un atentado y una semana más tarde otro funcionario de la secretaría fue asesinado. El reclutamiento forzado también está aumentando en Tumaco. Líderes indígenas de los departamentos de Nariño y Cauca también han sido asesinados. Lo anterior pone en peligro las ya débiles comunidades indígenas. Una situación similar está afectando a la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, en donde según Codhes el reclutamiento forzado está aumentando rápidamente y causando desplazamientos masivos. Cincuenta civiles han sido asesinados en los primeros cuatro meses de 2009 en diversos municipios de Córdoba. Más hacia el norte, a lo largo de la costa caribe, ACNUR reportó amenazas en contra de funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, Acción Social y de abogados representantes de población desplazada. En la región del Catatumbo, en Norte de Santander, grupos armados ilegales reclutan a la fuerza a jóvenes, mientras que las comunidades indígenas continúan desplazándose denunciando los peligros de las confrontaciones armadas y el impacto de las fumigaciones aéreas en sus cultivos. Cerca a Bogotá, en el municipio aledaño de Soacha, amenazas contra niños entre los 7 y los 17 años fueron denunciadas. Según fuentes locales, 13 menores fueron asesinados en marzo por grupos armados ilegales. La comunidad humanitaria y ONG locales han expresado su preocupación y han hecho labores de cabildeo para pronunciarse sobre la necesidad de medidas preventivas y de protección más enérgicas.

---

\* Toda la información aquí expresada fue procesada por OCHA tanto de fuentes oficiales como secundarias

CONTACTOS PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS

María José Torres  
Jefe de Oficina  
[torres8@un.org](mailto:torres8@un.org)

Juan Chaves  
[chavesj@un.org](mailto:chavesj@un.org)

María de la Luz Vásquez  
[vasquezm@un.org](mailto:vasquezm@un.org)

Teléfono: +57.1.6221100, ext. 107  
[www.colombiassh.org](http://www.colombiassh.org)